

Gobierno de Guatemala - Ba1 estable

Actualización periódica

22 enero 2025

El perfil crediticio de Guatemala equilibra bajos niveles de ingreso e instituciones comparativamente débiles frente a un historial de gestión fiscal prudente y vulnerabilidad externa limitada. Los principales desafíos crediticios del país incluyen una base de ingresos estrecha, un déficit de infraestructura pública que debilita las inversiones extranjeras directas (IED) y la competitividad de las exportaciones del país, y los débiles indicadores de gobernanza. Los indicadores de deuda se han mantenido en gran medida estables a pesar de un ligero deterioro en 2020 como consecuencia de la pandemia de coronavirus. La ratio de Deuda/PIB de Guatemala del 27% en 2023 fue uno de los más bajos entre sus pares con calificación Ba.

Fortalezas crediticias

- » Historia de una gestión fiscal prudente
- » Estabilidad macroeconómica continua a pesar de los shocks externos
- » Importantes remesas al exterior de trabajadores, que ascienden a casi el 20% del PIB

Desafíos crediticios

- » Estado de derecho y perfil de gobernanza débiles

» Bajos ingresos del gobierno en comparación con los de sus pares con calificación Ba

» Ingreso per cápita comparativamente bajo

Perspectiva de calificación

La perspectiva estable refleja los esfuerzos del gobierno en materia de lucha contra la corrupción, transparencia y reforma social y el enfoque en inversión para la atención pública para abordar el déficit de infraestructura de la economía, así como un creciente historial de reformas legislativas promulgadas en el parlamento, en equilibrio con casos de luchas internas institucionales que sustentan el riesgo continuo de eventos políticos, además de los altos niveles de comercio y exposiciones a remesas en Estados Unidos.

Factores que podrían conducir a una actualización

Surgiría una presión al alza sobre el perfil crediticio si las medidas de política se tradujeran en mejores condiciones económicas, lo que llevaría a mayor crecimiento del PIB de forma sostenida. Una mejora significativa del marco institucional del país en general y en particular de los indicadores de gobernanza, incluso durante los ciclos electorales, también respaldarían una calificación más alta.

Factores que podrían llevar a una rebaja

La calificación podría bajar si hay un deterioro en el compromiso de larga data del país con una gestión fiscal prudente. Un desempeño económico peor de lo esperado que conduce a ratios de deuda persistentemente más altos y un debilitamiento en los indicadores de desarrollo social. Una mayor inestabilidad política debilitaría el perfil crediticio de Guatemala.

Consideraciones crediticias detalladas

El perfil crediticio de Guatemala incorpora una evaluación de fortaleza económica de “baa3”, una evaluación de la fortaleza de instituciones y gobernanza de “ba2”, una evaluación de fortaleza fiscal de “baa1” y una evaluación de susceptibilidad al riesgo de eventos de “ba”.

Nuestra evaluación de “baa3” para la fortaleza económica equilibra un crecimiento económico estable, con un promedio del 3,7% proyectado para 2019-28, con un PIB per cápita relativamente bajo (sobre la base de la paridad del poder adquisitivo) de 14.158 dólares. Se subraya la resiliencia de la economía guatemalteca, el PIB real se recuperó con fuerza en 2021, expandiéndose un 8% tras una contracción superficial del 1,8% en 2020. Respaldado por un mayor gasto público de inversión y gasto fiscal, esperamos que el crecimiento se fortalezca hasta el 4% en 2025 después de registrar un 3,7% esperado en 2024. La puntuación está por debajo de la puntuación inicial “baa2”, lo que refleja factores estructurales como el déficit de infraestructura de la economía, que limita su potencial de

crecimiento y agudas disparidades sociales. Con un PIB nominal de \$104 mil millones en 2023, Guatemala es la economía más grande de Centroamérica y por encima del nivel medio de 84 mil millones de dólares con relación a sus pares con calificación Ba.

La puntuación de fortaleza de las instituciones y la gobernanza de Guatemala es “ba2”. El país obtiene una puntuación muy baja en el ranking mundial de los indicadores de gobernanza, que utilizamos como ancla para nuestra evaluación de fortaleza institucional. Las principales debilidades se encuentran en las áreas de control de la corrupción, estado de derecho y eficacia gubernamental, mientras que las fortalezas incluyen un historial de políticas fiscales y monetarias prudentes, datos de transparencia, un historial cada vez mayor de reformas legislativas promulgadas en el parlamento a pesar del estatus minoritario del partido gobernante, y una relación sólida con el FMI y otros organismos multilaterales. La formulación de políticas macroeconómicas por parte del gobierno y el banco central ha demostrado ser eficaz, como lo ilustran una inflación ampliamente estable, un sistema financiero sólido y la ausencia de políticas desequilibrantes significativas.

Evaluamos la solidez fiscal en “baa1”. Guatemala tiene una larga historia de gestión fiscal prudente, lo que ha resultado en una deuda baja y estable con relación al PIB. Al mismo tiempo, la captación de ingresos es baja debido a que una gran proporción de la fuerza laboral trabaja en el sector informal

(cerca del 70% de la población económicamente activa), evasión fiscal, bajas tasas impositivas y un historial de corrupción. Los ingresos del gobierno fueron de 12,5% del PIB en 2023, uno de los más bajos de América Latina y muy por debajo del índice medio con calificación Ba de 28,0%. Una baja ingesta de ingresos debilita la asequibilidad de la deuda, medida en términos de interés/ingresos, que fue del 13,1% en 2023, por encima de la mediana con calificación Ba del 9,3%. A pesar a la débil generación de ingresos, el gobierno tiene un historial donde mantiene déficits fiscales moderados y una continua sostenibilidad de la deuda.

Nuestra evaluación de "ba" para la susceptibilidad al riesgo de eventos refleja el riesgo político, que surge de la polarización política y la situación actual. Las luchas internas institucionales que involucran al partido gubernamental Semilla en un contexto de agudas desigualdades de ingresos que alimentan el riesgo de perturbación social. Evaluamos el riesgo de liquidez del gobierno en "a" para reflejar el respaldo del servicio de la deuda en forma de amortización y cuenta operada por el banco central y bajas necesidades brutas de financiación. Nuestra evaluación de riesgos del sector bancario es "baa", equilibrando la falta de garantías explícitas del gobierno para los bancos parcialmente estatales contra el riesgo de concentración y la posible tensión de riesgo de activos derivados de descalces de monedas extranjeras en los balances de los prestatarios. Evaluamos el riesgo de vulnerabilidad externa en "aa" porque históricamente, el país ha registrado pequeños desequilibrios externos que

en su mayoría fueron cubiertos por la IED. En los últimos años, la cuenta corriente ha tenido un superávit, impulsado por grandes entradas de remesas. Las reservas internacionales han aumentado en los últimos años y el indicador de vulnerabilidad, que mide los próximos pagos de la deuda externa en relación con las reservas de divisas, cayó por debajo del 20% a partir de 2023, lo que indica que las reservas cubren ampliamente el monto de los próximos pagos externos.

Desarrollos recientes: Ampliación presupuestaria moderada para abordar las brechas de inversión pública y social sin socavar la prudente política fiscal del país.

El gobierno, encabezado por el presidente Bernardo Arévalo, que ahora cumple un año en el cargo, planea apuntar a inversiones sociales y públicas descuidadas durante mucho tiempo, esas brechas en la economía guatemalteca. Fundamentalmente, la estrategia fiscal para los próximos años no comprometerá la responsabilidad de Guatemala para mantener déficits relativamente bajos y una carga de deuda baja. El presupuesto de 2025, aprobado en diciembre, es el primero que se negocia y se promulga bajo el gobierno de Arévalo, e incluye más asignaciones de gasto para la reducción de la pobreza, inversión pública para generar empleo e ingresos, y medidas para aumentar la transparencia y combatir la corrupción.

En línea con las proyecciones del gobierno a mediano plazo, esperamos una expansión moderada y temporal del déficit fiscal durante los próximos cuatro años. Esperamos que el déficit fiscal se amplíe hasta el 3,1% del PIB

en 2025 desde un 1% estimado en 2024 a la luz de unas cifras superiores a las presupuestadas por los ingresos obtenidos durante el último año. En los próximos años, esperamos que el déficit fiscal se reduzca entre el 2,5% y el 3% del PIB. El gobierno también pretende ampliar estructuralmente la recaudación de ingresos mediante mejoras en la administración tributaria y una ampliación de la base imponible en lugar de aumentar los tipos impositivos. Mientras tanto, esperamos que la relación deuda/PIB se mantenga contenida y alcance aproximadamente un 30% para 2027 (ver Cuadros 5 y 6). Este nivel todavía se encuentra significativamente por debajo de la mediana con calificación Ba, y la asequibilidad de la deuda, medida por interés/ingresos, también contenido en un 13,8% esperado en 2025.

Las luchas internas institucionales y la minoría en el Congreso limitan la acción del gobierno y el partido gubernamental Semilla sigue enfrentándose a importantes limitaciones dada su minoría en la legislatura y a desafíos legales por parte de la fiscal general y del sistema judicial. El 28 de noviembre, el juez Freddy Orellana ordenó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) suspender la personería jurídica de Semilla como partido político. Esto ocurrió apenas dos días después de que el legislativo aprobara una reforma de la ley contra el crimen organizado con el objetivo de impedir la disolución del partido Semilla. Los legisladores del partido Semilla se encuentran en el proceso de apelar Constitucionalmente para revertir el fallo del TSE, por ahora los legisladores independientes están inhabilitados para presidir comités en el Congreso. Sin embargo, el

gobierno y el partido Semilla han demostrado un alto grado de versatilidad, habiendo conseguido amplias mayorías para promulgar una serie de reformas prioritarias, incluidas leyes para apoyar la infraestructura y la competencia, aumentar la transparencia y abordar el crimen y la corrupción.

La inversión pública y la mejora del entorno empresarial respaldarán el crecimiento, pero la geopolítica externa presenta riesgos

Los planes del gobierno para aumentar la inversión pública en sectores de alto efecto multiplicador como infraestructura, salud y educación es probable que sean una fuente importante de crecimiento en el corto y mediano plazo, añadiendo hasta 0,4 puntos porcentuales de crecimiento real cada año a partir de 2025 según el banco central. Además, el gobierno espera que algunas de las reformas ya promulgadas en 2024 ayuden a fomentar un mejor entorno empresarial e incentivar mayores flujos de IED, que han estado rezagados en relación con el resto de la región.

Sin embargo, la segunda administración Trump en EE.UU. (Aaa negativa) plantea un riesgo potencial para la economía guatemalteca dada su enérgica concentración en tomar medidas contra la migración. Las políticas punitivas destinadas a limitar las remesas o los flujos comerciales podrían tener graves repercusiones para Guatemala. En 2024, las remesas enviadas a Guatemala, predominantemente desde Estados Unidos, ascendieron a 22 mil millones de dólares, o aproximadamente el 20% del PIB. Además, Estados Unidos es el mayor socio comercial de Guatemala,

siendo el destino del 32% de sus exportaciones y la fuente del 30% de sus importaciones en 2023, señalando que Guatemala tiene un déficit comercial de larga data con Estados Unidos. Guatemala sufrió un impacto relativamente mínimo durante la primera administración Trump de 2017 a 2021, y el país podría aprovechar su condición de aliado útil en la región para evitar perturbaciones negativas, pero seguimos siendo cautelosos en nuestra evaluación.